



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0347/2017

FECHA: 20 de septiembre de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0347/2017 presentada por [REDACTED], [REDACTED] de la Junta de Personal de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito de 1 de marzo de 2017, la ahora reclamante, en su condición de Presidenta de la Junta de Personal de la Consejería de referencia remitió la siguiente solicitud de acceso a la información:

Teniendo en cuenta que, en los centros educativos, las secretarías de los mismos actúan como órganos administrativos y que el secretario de los mismos, así como el director, tienen competencias de gestión según establece la normativa (art. 31 i) y 35 d) del Real Decreto 82/1986, de 26 de enero y art- 30 i) y 34) del real decreto 83/1996, de 26 de enero) desde esta Junta de Personal les planteamos si, en los días o períodos no lectivos en que la secretaria de los centros permanece abierta con el personal funcionario (auxiliares administrativos nivel 12 y/o jefe de secretaria nivel 16, sin firma autorizada) e obligatoria la presencia, al menos del secretario, con el fin de que pueda cumplir con sus funciones de gestión y tramitación para garantizar la buena prestación del servicio.

ctbg@consejodetransparencia.es



Esta solicitud es resuelta por Resolución de 5 de abril de 2017 de la Directora General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. En concreto, en la misma se pone de manifiesto, en síntesis, lo siguiente:

- *El funcionamiento de los centros docentes descansa sobre los órganos de gobierno colegiados y unipersonales regulados, para los Institutos de Enseñanza Secundaria en el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza Secundaria, y para las Escuelas de Educación Infantil y Centros de Educación primaria en el Real decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y Centros de Educación Primaria.*
- *De acuerdo con las anteriores normas, los órganos unipersonales de gobierno constituyen el equipo directivo y trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, siendo la primera de ellas la de velar por el buen funcionamiento del centro. A tal efecto el Director es el órgano competente para dirigir y coordinar todas las actividades del centro.*
- *El Secretario tiene atribuída entre sus competencias la de ejercer por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración y servicios adscrito al centro. Como responsable de este personal, el Secretario organiza y supervisa tanto las tareas que tiene encomendadas, como su horario de permanencia en el centro, que se ajustará al de apertura del mismo de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Directora General de Función Pública, por la que se dictan instrucciones en materia de jornada de los empleados públicos.*
- *La permanencia en el centro de los órganos de gobierno, debe establecerse entre sus miembros por el Director, de forma que el trabajo que se desarrolle en las jornadas en las que no se imparte la docencia, se cubra de manera ordenada y suficiente, sin que ello implique su presencia en todo momento en los centros educativos. Todo ello de conformidad con la autonomía de organización y funcionamiento atribuida a los centros docentes por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.*

2. Frente a esta Resolución de 5 de abril de 2017 de la Directora General de Recursos Humanos la interesada plantea, mediante escrito de 3 de mayo de 2017 registrado en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el posterior 18 de agosto de 2017, una reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG. Con esa misma fecha por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se solicitó la subsanación de la reclamación al no haberse incluido entre la documentación remitida a esta Institución la originaria solicitud de información planteada ni la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte contra la que se presenta la



reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG. Ambos documentos fueron trasladados a este Consejo el posterior 18 de septiembre de 2017.

La interesada solicita, literalmente, que este Consejo se pronuncie sobre los siguientes aspectos:

1. *¿Es obligada la presencia física del Secretario o, en su defecto, del Director, en la secretaria de los centros educativos no universitarios a efectos de firma, gestión y tramitación, durante los días no lectivos en que el centro permanece abierto para prestar servicios de administración, a tenor del artículo 34.d) del Real Decreto 83/1996, de 26 de enero (Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados) y del que se hace eco en similar redacción el artículo 35.d) del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero?*
2. *Dado que la Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Directora general de Función Pública indica que Estas instrucciones tienen por objeto adecuar los calendarios laborales a las medidas de reordenación de, tiempo de trabajo de los empleados públicos derivadas de la disposición adicional primera de la ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, y del artículo 8 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio (...), y que los centros educativos no universitarios, con la excepción de las Escuelas Infantiles, no tienen calendario laboral, ¿es de aplicación el contenido de la resolución citada, o debe aplicarse la normativa general (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y Acuerdo Sectorial para el personal Funcionario de Administración y Servicios de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos...)?*
3. *En función de lo dispuesto por la normativa anterior, solicitamos aclaración de los conceptos “horario de apertura”, “horario lectivo” y “horario laboral”.*

A través de un escrito de 19 de septiembre de 2017, por parte de la Oficina de Reclamaciones Territoriales de este Consejo se dio traslado del expediente a la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid para conocimiento.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.



2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones de la LTAIBG el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 LTAIBG –BOE, n.13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Con carácter preliminar debemos recordar que la LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad *“ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”*.

Con esta finalidad, el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la *“información pública”* en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por la propia LTAIBG. Por su parte, en el artículo 13 de la reiterada LTAIBG se define la *“información pública”* como

Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos





en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, el artículo 24.1 de la LTAIBG prevé, como mecanismo de impugnación en los procedimientos de acceso a la información pública, la presentación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de una reclamación frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativo.

A tenor de los preceptos mencionados, no cabe duda alguna al respecto, podemos sostener que la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas con el requisitos e que se trate de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la propia Ley.

Asimismo, cabe advertir que las Reclamaciones planteadas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tienen por finalidad declarar el derecho de acceso a la información pública del reclamante cuando se den los presupuestos de hecho establecidos en dicha norma, no pudiendo entrar a conocer de aspectos que no forman parte del objeto de la misma.

Tomando en consideración el tenor literal del objeto del *petitum* de la reclamación remitida a este Consejo, no cabe albergar duda alguna sobre el particular, la finalidad de la pretensión de la ahora reclamante no es solicitar información pública sobre una materia sino, por el contrario, pretender que esta Institución se manifieste sobre la interpretación y aplicación de normativa autonómica en un ámbito material específico relacionado con el sector educativo. Actividad que dista notablemente de tratarse de la tarea encomendada por el legislador básico estatal a esta Institución con relación a la garantía del ejercicio del derecho de acceso a la información.

De este modo, en definitiva, tomando en consideración el objeto de la solicitud descrita en el que se plantea una actuación consultiva sobre el alcance de normativa autonómica por parte de este Consejo cabe concluir con la inadmisión de la reclamación planteada al quedar fuera del ámbito de aplicación de la LTAIBG.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **INADMITIR A TRÁMITE** la Reclamación presentada, en tanto que su objeto queda fuera del alcance del ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.





De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Esther Arizmendi Gutiérrez

